

Nuevas formas de representación y proyecto político

EOLO DÍAZ-TENDERO E.

Nuevas dinámicas políticas recorren América Latina. Tanto las alternativas nacional-populares como las de corte más socialdemócrata constituyen intentos por recoger estas nuevas dinámicas y transformarlas en formas de acción, más o menos estructuradas e institucionalizadas según los casos. El artículo argumenta que estos nuevos liderazgos de cercanía, de Michelle Bachelet a Hugo Chávez, no deben interpretarse solo según las características personales, sino que deben ser vistos como potenciales nuevos proyectos políticos que, de acuerdo con las particularidades de cada país, buscan revincular a la ciudadanía con las instituciones y la autoridad de la democracia.

En los últimos 20 o 25 años, las sociedades latinoamericanas han cambiado de modo significativo. Se han masificado nuevos tipos de conductas sociales que, al parecer, tendieron a modificar de modo sustancial las estructuras y el tipo de relaciones sociales dominantes. Si bien los rasgos de segregación cultural y económica siguen siendo un elemento distintivo en nuestras tierras, ellos evolucionan en contextos diferentes y bajo nuevas dinámicas.

Estas nuevas conductas sociales parecen provenir de dos fuentes principales que, a su vez, coinciden con dos macroprocesos sociopolíticos que han marcado la historia reciente de América Latina. Por una parte, lo hayan buscado o no, hayan recorrido el camino de modo más o menos autoritario o por vía democrática, nuestras sociedades han tendido a

Eolo Díaz-Tendero E.: académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y Asesor de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile.
Palabras claves: liderazgo, proyecto político, instituciones, América Latina.

expandir las esferas en las que el mercado, la competitividad y la capacidad de emprendimiento individual se convierten, cada vez más, en requisitos básicos para lograr una integración social efectiva.

El segundo macroproceso es la recuperación de la democracia y la consolidación de regímenes institucionales que se sustentan en el reconocimiento de derechos ciudadanos y que han sabido controlar, hasta ahora, las crisis que se han desarrollado en su seno. Una muestra de ello es la renovación regular de cargos de mandato popular mediante procedimientos transparentes y no cuestionados, sin que se hayan registrado interrupciones de corte autoritario o populista.

Ahora bien, estos cambios, tanto sociales como políticos e institucionales, no implican la ausencia de dificultades o la solución definitiva de las demandas sociales de integración y beneficios básicos. Es más, a partir de ellos se han comenzado a instalar nuevas dificultades. Así, a las viejas reivindicaciones se suman otras nuevas, que las estructuras partidarias y las instituciones públicas tienen serias dificultades para leer, lo que complica la posibilidad de dar respuestas eficaces y consistentes. No es casual que ya en 2004 el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el estado de la democracia en América Latina aludiera a un «déficit de estatalidad»¹.

Particularmente relevante resulta el hecho de que la expansión de las esferas de dominio de las lógicas de mercado y la competitividad individual se haya producido en ausencia (y muchas veces en contra) de una matriz consistente de protección social que se hiciese cargo de los costos de tales ajustes. Cabe recordar que, en general, los procesos modernizadores exitosos han descansado en un acuerdo entre capital y trabajo legitimado por la vía democrática. En general, se trataba de incentivar el desarrollo de la economía de mercado, pero asegurando una red de integración social y protección de derechos universales básicos (salud, educación y previsión) para el conjunto de la población.

Si existe entonces una suerte de vínculo esencial entre representación democrática, diálogo social y Estado de Bienestar, entonces cabría preguntarse por las consecuencias de desarticular estructuras públicas centradas en el bienestar y construir otras nuevas en ausencia de alguno de

1. PNUD: *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*, Alfaguara / Altea / Taurus / Aguilar, Buenos Aires, 2004.

estos términos. En ese sentido, al decir de Claus Offe, cuando se habla de la posible supresión del Estado de Bienestar, ello «exigiría nada menos que la limitación de la democracia y de los sindicatos, así como cambios fundamentales en el sistema de partidos»².

Podríamos decir que esto es justamente lo que ha sucedido en América Latina desde finales de los 70. Bajo distintas fórmulas –dictaduras o regímenes excluyentes–, se tendió a desactivar el componente de representación y diálogo social de esta matriz modernizadora. Los efectos de ello sobre las estructuras sociales del bienestar fueron también diversos. El caso más claro fue el de Chile, donde la dictadura procedió a desarmar el tejido de solidaridad pública. Sin embargo, desde fines de los 80, y fundamentalmente durante los 90, se produjo en la región un movimiento democratizador que recuperó los elementos de diálogo social y avanzó en los componentes institucionales básicos de los regímenes democráticos.

La modificación, por distintas vías, de esta fórmula es la que genera las tensiones que hoy intenta manejar la política. Por eso creemos que profundizar este argumento permitiría captar esas tensiones resultantes de los cambios y, particularmente, aclarar una batería de conceptos para comprender el esfuerzo de los actores políticos e institucionales a fin de dar vía de solución y cauce a los potenciales proyectos políticos.

Es justamente a partir de este hecho que podría interpretarse el surgimiento de los nuevos movimientos, liderazgos y estrategias políticas que han repuesto el tema de «la izquierda» en América Latina. Tanto las alternativas nacional-populares como las de corte más socialdemócrata constituyen intentos por recoger estas nuevas dinámicas y transformarlas en formas de acción, más o menos estructuradas e institucionalizadas según los casos. El resultado final dependerá de los equilibrios que se logre establecer, en cada caso, entre la fortaleza y la habilidad de las instituciones democráticas para adaptarse y procesar las dinámicas sociales emergentes.

Históricamente, las elites políticas emergentes han protagonizado la renovación de los proyectos políticos; es decir, han logrado leer las nuevas tendencias y dinámicas sociales y transformarlas en proyectos políticos innovadores y eficientes. Esto es lo que estamos observando hoy en América Latina: una especie de tanteo, aún sin plena claridad, sobre la factibilidad

2. *Les démocraties modernes à l'épreuve*, L'Harmattan, París, 1997.

de diferentes soluciones a los conflictos que plantean las nuevas dinámicas sociales.

Si bien el debate intelectual ha tendido a caracterizar los bocetos de proyectos políticos que encontramos hoy en América Latina entre un polo populista y uno socialdemócrata, parece más productivo plantear el tema a partir del análisis de la operatividad social de estos fenómenos. Así, la disyuntiva parece más enriquecedora si la planteamos como una tensión entre un particular tipo de ejercicio de la representación y el rol de las estructuras y los sistemas partidarios. Las soluciones particulares de cada sistema político están determinadas por la capacidad de los sistemas de partidos tradicionales de absorber o no las nuevas dinámicas de la representación. Así, algunas se fundarán sobre la ruina y el colapso de los viejos sistemas, mientras que otras seguirán el camino de la negociación entre la elite tradicional y la elite emergente. Queda por ver cuál de las dos alternativas garantiza más estabilidad a las democracias latinoamericanas.

■ **Los nuevos liderazgos políticos como señal del estado de las dinámicas sociales**

Desde la perspectiva descripta, cabe buscar indicios proyectables y útiles para observar estas dinámicas de renovación. Observemos entonces fenómenos sociopolíticos que ya hayan mostrado cierta eficacia. Volquemos la mirada hacia liderazgos que en los últimos años han logrado concitar gran adhesión ciudadana y se han instalado a la cabeza de importantes procesos de cambio en América Latina.

Si pudiésemos caracterizarlos en sus rasgos más generales y estructurales, tendríamos que decir que se trata de liderazgos que se han construido a cierta distancia (entendida como refundación o diferenciación) de los partidos políticos tradicionales, apostando a construir un vínculo directo con la ciudadanía y sus intereses (principalmente a través de los medios de comunicación y las encuestas). La principal promesa, expresada de modo diverso en cada país, es hacer política de un modo distinto, a fin de acercar la política a la ciudadanía e incorporar a aquellos actores sociales que han permanecido al margen de los beneficios del crecimiento y la estabilidad.

Nos referimos a Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Rafael Correa en Ecuador y Michelle Bachelet en Chile,

y también, por qué no, a Álvaro Uribe en Colombia. En todos los casos, de un modo más o menos tenso con el sistema político tradicional, estos líderes han logrado llevar adelante procesos de reforma y políticas públicas que intentan transformar en cuerpos institucionales sus promesas de campaña.

Si bien cada caso responde a situaciones particulares, cabe analizarlos todos a partir de la pregunta que subyace a su éxito electoral. ¿Es la distancia con el sistema político tradicional la que posibilita este éxito? ¿Qué consecuencias genera esta distancia para la estabilidad institucional de los regímenes democráticos? En definitiva, se trata de centrar el debate sobre este fenómeno no alrededor de la dicotomía populismo *versus* democracia, sino más bien del análisis de cómo las debilidades de la representación contemporánea facilitan el surgimiento de estos liderazgos y, por lo tanto, cuáles son las capacidades de las instituciones democráticas para soportarlos. Esto daría origen a distintos arreglos políticos según la fortaleza o debilidad de cada caso para institucionalizarlos.

La tendencia es hacia una tensión entre la operatividad social de los partidos y las instituciones públicas y la acción de liderazgos personales de alto impacto público que privilegian una interpelación directa a la ciudadanía. Se consolida la idea de que, como plantea Marcos Novaro, «las nuevas formas representativas nos estarían incitando a reconocer que la personalización, lejos de ser un resabio cultural, o el efecto de una regresión autoritaria, satisface una necesidad intrínseca de la vida política»³.

Sin embargo, procesos políticos de largo alcance no se construyen solo sobre la base del culto a la persona o a partir de la exacerbación de ciertas características de carisma propias de todo liderazgo eficaz. Urge entonces pensar los liderazgos políticos no solo como un fenómeno de alta eficacia comunicacional o como un mero recurso electoral que permita renovar la confianza de los ciudadanos en ciertas opciones partidistas para administrar el aparato estatal de modo legítimo. Es necesario agregarle el componente de proyecto político que subyace al liderazgo y que permitirá su institucionalización y consolidación.

En ese sentido, un liderazgo podría ser definido como una estructura de posibilidades⁴ que genera empatía social asociada a rasgos de personalidad

3. *Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas*, Homo Sapiens, Rosario, 2000.

4. Antonio Natera: *El liderazgo político en la sociedad democrática*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.

del personaje, una historia de vida particular y la movilización de ciertos recursos simbólicos, con mecanismos y procedimientos decisionales y de poder. Esto significa que un liderazgo eficiente, en un contexto democrático, es aquel que logra traducir sus componentes de empatía social en dinámicas institucionales.

En este esquema, entonces, el líder posee un componente de correcta lectura de las dinámicas que caracterizan un momento determinado del desarrollo de una sociedad, lo cual le permite recoger sus principales demandas. Pero además posee ciertos recursos de poder e influencia que le permitirán transformar esa capacidad de lectura en un proyecto político sustentado en estructuras decisionales, redes de apoyo e influencia, agendas claras y procedimientos concretos de ejecución de tareas.

La estructura de oportunidades de un liderazgo podría definirse a partir de los niveles de empatía existentes entre los rasgos constitutivos del líder o el estilo del liderazgo y el público de referencia de esa acción, sea este un público restringido (como ocurre dentro de una organización particular) o sea en relación con la subjetividad social general. Esto implica que las acciones y decisiones del líder tendientes a generar un impacto sobre el medio, modificar conductas o realizar cambios, junto con el modo en que son impulsadas, se cruzan armónicamente con las expectativas que el público ha desarrollado, más o menos difusamente, sobre los cambios y ajustes de entorno necesarios para su integración y desarrollo.

Del mismo modo, el modelo de comportamiento político del líder responde al modo en que las oportunidades que el medio ofrece y que él mismo crea se concretan y transforman en hechos y políticas. ¿Cuáles son los recursos de poder con los que cuenta el líder? ¿De qué modo determina la agenda de sus decisiones? ¿Cómo lleva a la práctica las tareas que se impone? El líder se apoya en el entorno institucional para que su capacidad de encarnar las expectativas ciudadanas se traduzca en políticas públicas.

En definitiva, el modelo de comportamiento político de un líder está compuesto por al menos tres ámbitos que son centrales en la configuración de su estilo y, por lo tanto, del modo en que movilizará sus recursos de poder. Este es el punto de vista que nos interesa destacar, ya que permite complementar las visiones comunes que enfatizan el aspecto puramente personalista de los liderazgos.

Como hemos señalado, todo líder tiene un modo particular de construir sus decisiones y ordenar la agenda; es decir, a partir de su evaluación y percepción del entorno, maximiza los recursos para que sus decisiones, en consonancia con su capacidad de conectar con la subjetividad ciudadana, cobren existencia institucional.

Al mismo tiempo, todo líder debe determinar el rol específico que él cumplirá en el desarrollo de su agenda. Existen líderes más bien delegativos, otros que mantienen su presencia en todos los ámbitos de acción, otros que tienen especial predilección por las áreas en que manifiestan mayor conocimiento, etc. En definitiva, lo que está en juego en este aspecto es el modo en que el líder traduce funcionalmente su carga simbólica, aquella que lo hace atractivo a los ojos de la ciudadanía, en acción concreta.

Finalmente, un líder debe procurarse los recursos y apoyos necesarios para concretar sus metas. En este ámbito, se puede distinguir, por una parte, distintos tipos de recursos, desde los más concretos hasta los más simbólicos, y por otra, diferentes clases de apoyos, desde relaciones de amistad hasta acciones formales e institucionalizadas.

En suma, la efectividad de un líder no se mide solo por su capacidad de empatía con la ciudadanía, sino también por su habilidad para generar redes de apoyo consistentes con el modo en que ha logrado traducir esa empatía en agenda política. En definitiva, el liderazgo no es un fenómeno centrado exclusivamente en la persona; es un fenómeno relacional que involucra individuo, colectivos e instituciones.

Por eso, la función del líder no se restringe a la eficacia inmediata de su mediación con el poder puramente formal y fríamente técnico; también implica el desafío de cómo transformar ese «paliativo» en solución institucional. ¿Qué instituciones son coherentes con este rol del líder demandado y apoyado por la ciudadanía? ¿Cuáles son las formas de planificar y ejecutar la acción de las instituciones, esta vez guiadas por los principios de reconocimiento y horizontalidad propios del liderazgo? Es justamente en este intersticio donde se pueden observar las tensiones entre la voluntad innovadora del liderazgo y los procedimientos formales disponibles para realizarlos.

A continuación, veremos cuáles son las dinámicas sociales que han hecho eficientes a los liderazgos que hemos señalado; posteriormente, observaremos

cuáles pueden ser las claves para que esto avance hacia elementos y dinámicas propios de un proyecto político institucional.

■ **Nuevo eje de acción para un proyecto político: la demanda por seguridad simbólica**

La capacidad empática de los liderazgos se relaciona con las aspiraciones de los ciudadanos respecto de sus líderes, como un reflejo y a la vez una exigencia del modo en que se ejerce la autoridad. Es decir, bajo la aparente eficacia de los liderazgos personales subyace una crítica frontal a la representación política, las instituciones democráticas y sus políticas. Tomando algunos datos de Chile registrados en los Informes sobre Desarrollo Humano, podríamos afirmar que una de las principales demandas de la ciudadanía consiste en sentirse parte de los procesos políticos, frente a autoridades e instituciones consideradas lejanas y sin sentido.

Una forma de ilustrar esto es recuperar los datos de la encuesta nacional elaborada por el PNUD de Chile en 2004 acerca de las distintas percepciones ciudadanas sobre el poder y las sensaciones asociadas a la autoridad. De acuerdo con esta encuesta, 38% de los entrevistados siente rabia frente al poder y lo percibe como una fuente de abuso. Por otra parte, 22% entiende que el poder es un medio de acción personal, pero que está reservado para «los mejores», es decir, para aquellos que tienen las oportunidades. Si a ello se le suma 17% de entrevistados que entiende el poder solo como la necesidad de orden, se hace evidente que, en general, la población ha desarrollado un imaginario más bien negativo de su relación con el poder y, por lo tanto, del tipo de vínculo que establece con las autoridades.

Una de las explicaciones posibles se relaciona justamente con el tipo de dinámica política que se ha establecido en las democracias latinoamericanas durante muchos años. Como ya señalamos, la expansión de las lógicas de competitividad no ha sido acompañada por procesos de incorporación y reconocimiento de derechos sociales. De acuerdo con el ya citado informe sobre el estado de la democracia en América Latina elaborado por el PNUD⁵, los sistemas democráticos han funcionado solo en su expresión más restringida –asegurando las dinámicas electorales–, pero tienen escasa capacidad para hacerse cargo de un imaginario ciudadano en el que la democracia es bastante más que elecciones.

5. PNUD: ob. cit.

Este déficit de estatalidad –es decir, esta debilidad de las instituciones públicas para intervenir eficientemente sobre la realidad social de los ciudadanos– hace que las autoridades sean percibidas como lejanas, y que los beneficios de las nuevas circunstancias sociales no alcancen a toda la población. Esto produce las sensaciones recogidas por los estudios, como el ya mencionado del PNUD en Chile.

En palabras de Norbert Lechner⁶, pareciera que en Chile se ha producido una inversión de la paradoja del desarrollo frustrado de la década del 60. En aquel entonces, según la tesis de Aníbal Pinto, Chile mostraba una madurez institucional y política a toda prueba, pero mantenía una base económica débil que no le permitía lograr un desarrollo pleno. Al parecer, la modernización autoritaria de los 80 generó una madurez económica, pero ha dejado un déficit político importante. El resultado es una fuerte demanda de seguridad simbólica por parte de los ciudadanos, que buscan sentirse reconocidos e integrados a la comunidad.

Es por ello que los liderazgos de cercanía, que tienden a revincular a la autoridad con la ciudadanía y cuya principal promesa es el reconocimiento de las demandas y la incorporación social, son los más eficientes. Si bien este argumento se basa en el análisis del caso de Chile, se podrían establecer paralelos en aquellos países en los que han prosperado liderazgos similares. Por ejemplo, el liderazgo de Kirchner en Argentina emergió tras la crisis del sistema financiero y político que derivó en el «Que se vayan todos» como expresión de la profunda distancia entre las elites y la ciudadanía. Lo mismo cabe observar en los casos de Bolivia o de Uruguay.

Por todo lo anterior, el proyecto político verdaderamente innovador es aquel que logra traducir los contenidos comunicacionales y electorales del liderazgo en estrategias de poder y políticas institucionales bajo nuevas claves de construcción política. Sin embargo, como ya hemos visto, el desafío parece muy simple desde un punto de vista teórico, pero su realización genera bastantes más interrogantes cuando se traslada a la práctica. ¿Cómo traducir la empatía personal de un liderazgo en procedimientos institucionales legítimos y eficientes? En definitiva, ¿qué aportes puede hacer el liderazgo a la creación de un proyecto político renovador de las dinámicas de la representación?

6. «Modernización y democratización: un dilema del desarrollo chileno» en *Estudios Públicos* N° 70, otoño de 1998.

■ El nuevo trabajo de la representación política: los desafíos contemporáneos

Proyectar los liderazgos hacia un nuevo proyecto político implica repensar la acción política bajo nuevos códigos y traducir esto en estrategias con asiento eficaz en las instituciones democráticas. De ahí la importancia de utilizar una concepción ampliada de liderazgo, que vaya más allá de sus elementos de personalismo.

Por una parte, entonces, el liderazgo de cercanía y empatía ciudadana, que impone desafíos concretos al modo en que las instituciones democráticas se relacionan con los ciudadanos. Por otra parte, el liderazgo como movilización de recursos de poder e institucionales, que demuestra que la representación contemporánea no se agota en el trabajo parlamentario y electoral, sino que tiene derivaciones ejecutivas y de políticas públicas en general. A partir de autores contemporáneos, podemos desarrollar algunas nociones sobre los desafíos actuales que esto plantea a la política.

Los avances institucionales ya realizados en este ámbito se relacionan con la posibilidad de trasladar la simplicidad de la comunicación del líder con el ciudadano al ámbito institucional. Pierre Rosanvallon muestra con detalle histórico cómo la sociedad, frente a la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, ha creado mecanismos para afrontarla dinamizando tres elementos de la acción política: imparcialidad, reflexividad y proximidad⁷.

Frente a la distancia entre ciudadanos e instituciones, se han creado instancias de imparcialidad en las que descansan funciones de supervigilancia hacia la autoridad. Esto se realiza a través de cuerpos institucionales autónomos que se instalan como una interfaz entre Estado y ciudadanos, tales como los defensores del pueblo o los consejos encargados de hacer pública y accesible la información a los ciudadanos.

Por otra parte, frente a una suerte de naturalización de los cuerpos legales y su desdibujamiento como expresión de consensos sociales, se ha abierto el debate sobre los procesos constituyentes. Esto implica recuperar el derecho de la comunidad a encarar acciones reflexivas sobre sus cuerpos legales y sobre el derecho y sus formas institucionales como espacios de expresión de la soberanía popular.

7. *La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité*, Seuil, París, 2008.

Finalmente, tal vez el principio más evidente en este proceso de reconstrucción de proyectos políticos es el de proximidad, que recoge de manera más directa y clara los desafíos impuestos por los liderazgos personales. En este ámbito se sitúa la participación ciudadana en el diseño y la implementación de políticas públicas⁸.

Ahora bien, dadas las nuevas circunstancias sociales, caracterizadas por una mayor autonomía de los sujetos, nuevas dinámicas de integración social y la inexistencia de megarelatos, el trabajo de construcción de la representación política comienza a mutar drásticamente. Al parecer, el rol de «la política» ya no es trasladar hacia el escenario decisional las demandas y visiones de mundo que previamente se hayan constituido en la sociedad, sino que más bien dichas identidades se constituyen en el espacio público. Esto implica que el nuevo trabajo de la representación requiere, al parecer, volver a un antiguo principio: «el pueblo no pre-existe al hecho de invocarlo y de buscarlo: se construye. El fondo de esta contradicción está en el corazón de la política moderna»⁹. El objetivo de la política contemporánea sería, entonces, la creación e instalación de sentidos socialmente aceptados y, por lo tanto, la construcción de dispositivos de reconocimiento e incorporación de la subjetividad.

Sin embargo, esa subjetividad no se presenta de un modo acabado y regular. Es más, pensar en una regularidad tal significaría volver a mirar la realidad con los viejos ojos de la política. El mismo Rosanvallon¹⁰ advierte que la democracia está caracterizada hoy por los impactos de las nuevas formas de relación social derivadas de las dinámicas de red, que no se limitan al uso de la tecnología de la información y la comunicación en el ámbito de la esfera privada e individual, sino que tienen también los comportamientos sociales.

La nueva subjetividad social tiende a comprometerse focalmente con ciertas iniciativas que –al igual que el comportamiento observado en internet– se abandonan con libertad. Según Pedro Güell¹¹, las sociedades contemporáneas

8. Existe un rico debate al respecto entre académicos y planificadores; v. por ejemplo Frank Fischer: *Citizens, Experts, and the Environment*, Duke University Press, Durham, 2000; o Maarten Hajer y Hendrik Wagenaar (eds.): *Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance in the Network Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003; también F. Fischer: *Reframing Public Policy. Discursive Politics and Deliberative Practices*, Oxford University Press, Nueva York, 2003.

9. P. Rosanvallon: *Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Gallimard, París, 1998, p. 18.

10. *La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, Seuil, París, 2006.

11. «Amistad Cívica: de la palabra a la experiencia», Serie Papeles de Trabajo N° 77, Corporación Tiempo 2000, Santiago de Chile, 2003.

se comportan como ensayadores prácticos y libres de promesas y visiones de mundo, no como adherentes permanentes a causas históricas.

Ahora bien, estas dinámicas siguen siendo eficientes al momento de controlar la autonomización del poder y la economía. Es decir, siguen siendo eficientes en la política. Jürgen Habermas indica que la conflictividad social contemporánea logra eficiencia política en tanto comparece en el espacio público, rompiendo con las dinámicas autorreproductivas propias del sistema de poder y de toma de decisiones¹². Es decir, la posibilidad de acción eficiente en la política ya no guarda relación con la existencia de sujetos sociales que cargan sobre sus espaldas grandes proyectos históricos de transformación social, sino con ciertos actores, circunstanciales y focalizados, que pueden establecerse como vigías de ciertas causas y, de ese modo, influir sobre las dinámicas de la economía y la política.

Este rol de vigía, esta capacidad de romper las esclusas clásicas del poder y sus marañas decisionales con fuerza social y copamiento del espacio público, pueden configurar un modo de acción de los partidos políticos que les permita reconstruir formas de representación e impulsar transformaciones de corte progresista en las sociedades contemporáneas.

En definitiva, si los nuevos liderazgos han sido eficientes al momento de rescatar la nueva subjetividad social latinoamericana, el desafío de la agenda de innovación de las elites intelectuales y partidarias consiste en traducir esa eficiencia en dinámicas de trabajo político e institucional que, haciéndose cargo de las nuevas formas de acción social, consoliden proyectos políticos consistentes con las demandas de reconocimiento y de reconstrucción de la política que subyacen a los procesos sociales contemporáneos. ☐

12. *Droit et démocratie. Entre faits et normes*, Gallimard, París, 1997.